

Mujeres jóvenes con medidas de protección y judiciales y sus tránsitos hacia la prisión

Young women with protective and judicial measures and their transition towards prison

Dra. Fanny T. AÑAÑOS-BEDRIÑANA. Profesora Titular. Universidad de Granada (fanntab@ugr.es).

Dr. Miguel MELENDRO. Profesor Titular. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (mmelendro@edu.uned.es).

Dra. Rocío RAYA MIRANDA. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Granada (rroya@ugr.es).

Resumen:

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las medidas de protección y/o judiciales en el tránsito a prisión de las mujeres jóvenes que pasaron por esas situaciones cuando eran menores de edad, a partir de la identificación de los factores de riesgo asociados al proceso. Aportando así nuevos y contrastados elementos de referencia para la intervención con el colectivo de mujeres jóvenes en prisión.

Para ello se combinan métodos cualitativos y cuantitativos, en una muestra de 599 mujeres reclusas, a quienes se realizaron 538 encuestas y 61 entrevistas, de 42 centros penitenciarios

españoles. Se seleccionaron tres submuestras: centros de protección (n=60); acogimiento familiar (n=36) y medidas judiciales (n=72). Se realizó un estudio descriptivo e interpretativo mediante análisis de frecuencias, tablas de contingencia, contrastes de independencia y medidas de asociación.

Los resultados muestran que un 20.3% de las jóvenes en prisión han tenido historias previas de institucionalización a partir de medidas de protección y un 13.4% medidas judiciales. Los principales factores de riesgo identificados son: baja formación educativa (69.4% inferior a educación secundaria), contextos familiares

Agradecimientos: Este trabajo se sitúa en el marco del Proyecto de Investigación I+D+I Procesos de reinserción y acompañamiento a mujeres en semilibertad (REINAC), Ref. EDU2016-79322-R, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España (MINECO), la Agencia Española de Investigación (AEI) y Feder, 2016-2019.

Fecha de recepción de la versión definitiva de este artículo: 15-02-2019.

Cómo citar este artículo: Añaños-Bedriñana, F. T., Melendro, M. y Raya Miranda, R. (2019). Mujeres jóvenes con medidas de protección y judiciales y sus tránsitos hacia la prisión | *Young women with protective and judicial measures and their transition towards prison*. *Revista Española de Pedagogía*, 77 (273), 333-350. doi: <https://doi.org/10.22550/REP77-2-2019-05>

<https://revistadepedagogia.org/>

ISSN: 0034-9461 (Impreso), 2174-0909 (Online)

y de pareja con miembros en prisión (entre 48% y 63.2%), adicciones (drogas y alcoholismo) tanto familiar como personales (más del 60%) y, relación significativa de denuncias de malos tratos por las jóvenes que tuvieron medidas judiciales cuando eran menores.

En la discusión y las conclusiones se resalta la evidencia del crecimiento delictivo de los jóvenes, especialmente mujeres. Respecto al grupo estudiado se destaca la baja valoración de las reclusas de su estancia en centros de protección y en medidas judiciales, la gravedad de los antecedentes familiares y afectivos y, la preocupación por sus bajos niveles formativos. Datos que refuerzan las bases de evaluación de la incidencia temprana en los procesos de tránsito a la prisión y las posibilidades de intervención socioeducativa orientada a la reinserción e inclusión.

Descriptor: joven, mujer, género, protección a la infancia, delincuencia juvenil, factor de riesgo, prisión, educación.

Abstract:

The aim of this work is to analyse the influence of protective and/or judicial measures on the transit to prison of young women who have been through these situations as minors, starting by identifying risk factors associated with the process. Consequently, it provides new verified benchmarks for intervention with the population of young women in prison.

To this end, qualitative and quantitative methods are used with a sample of 599 female inmates from 42 Spanish prisons, to whom 538

surveys and 61 interviews were applied. Three subsamples were selected: protection centres (n = 60); foster care (n = 36), and judicial measures (n = 72). A descriptive and interpretative study was carried out using frequency analysis, contingency tables, independence tests, and measures of association.

The results show that 20.3% of young women in prison have a prior history of institutionalisation in protective measures and 13.4% with judicial measures. The main risk factors identified are: low educational levels (69.4% below secondary education), environments with family members or partners in prison (between 48% and 63.2%), addictions (drugs and alcohol), either personal or affecting family members (over 60%), and a significant relationship between young people who experienced judicial measures as minors having made reports of abuse.

In the *discussion and conclusions*, growth in criminal behaviour by young people, especially women, is evident. Regarding the group studied, the low valuation of their time in protection centres and judicial measures by the imprisoned women, the difficulty of their family and affective background, and their worryingly low levels of education are striking. These data support the bases for evaluating the early impact on processes of transit towards prison and the options for socio-educational intervention aimed at reintegration and inclusion.

Keywords: youth, women, gender, child protection, juvenile delinquency, risk factor, prison, education.

1. Introducción

Este trabajo se plantea como objetivo analizar la incidencia de las medidas de protección y/o las medidas judiciales en el tránsito a prisión de las mujeres jóvenes que pasaron por esas situaciones cuando eran menores de edad, a partir de la identificación de los factores de riesgo asociados al proceso. Conocer esos factores de riesgo aporta información muy relevante para evaluar su incidencia temprana en el proceso de tránsito de las mujeres jóvenes a la prisión; y a su vez ayuda a avanzar en las posibilidades de intervención socioeducativa con ellas, como un espacio educativo orientado a su reinserción e inclusión.

El internamiento en prisión presenta, en sí mismo, importantes cargas negativas para las mujeres, ya que en su caso al estigma criminal se suman el peso y la sanción moral, familiar y social asociados, por cuestiones tradicionales de género (Durán 2009; Juliano, 2010a; Añaños-Bedriñana, 2013; Smart, 2013; Aristizábal, 2017; Almeda, 2017). En cuanto a la actividad delictiva de las mujeres, las teorías convencionales se centran en características individuales que se atribuyen a elementos como la sexualidad y los estereotipos tradicionales (Smart, 1995; Burman, Batchelor y Brown, 2001; Belnap, 2006; Chesney-Lind & Pasko, 2013; Almeda, 2017). Aportaciones significativas sobre el tema que se basan en una perspectiva de género, ponen en evidencia la posición de la mujer en la estructura social y su vulnerabilidad estructural, destacando, entre otras, las relacionadas con la masculinización psicológica de las mujeres, el aumento de participación de las mujeres en los asuntos

públicos, la feminización de la pobreza y un menor sesgo en las respuestas oficiales hacia la delincuencia femenina (Simon y Ahn-Redding, 2005; Tortosa, 2009; Juliano, 2010b, Abramovitz, 2017).

En cuanto a la situación de las mujeres jóvenes en prisión, una vez que cumplen los 18 años y cometen delitos, se aplica el Código Penal vigente (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre y ss.¹) y pueden ser condenadas a medidas alternativas a prisión o ingresar en los Centros Penitenciarios (en adelante CP) habituales establecidos por los organismos de justicia y seguridad del Estado; dentro de los CP se las sitúa en módulos específicos y exclusivos para ellas.

Si se analiza el medio penitenciario desde el enfoque de género, este refleja las desigualdades en el contexto social ligado a cada situación social y al rol femenino vigente en cada época. Hoy, en las sociedades occidentales, la exclusión social es una de las claves explicativas más común del perfil delictivo femenino (Cruells e Igareda, 2005; Juliano, 2010a; Añaños-Bedriñana, 2013; Almeda, 2003, 2017), cuyos rasgos y cifras se analizan en este trabajo, desde la perspectiva de los factores de riesgo.

Los datos que presentamos a continuación sitúan en cifras la población penitenciaria actual. En agosto de 2018, el total de la población penitenciaria española era de 59242, siendo el 92.5% hombres y 7.5% mujeres (SGIP, 2018). Asimismo, 16 622 internos eran extranjeros/as (28.1% del total), de los cuales el 92.4% eran hombres y el 7.6% eran mujeres. Datos elocuentes que reflejan

la enorme desproporción poblacional por sexo en el contexto penitenciario, siendo las mujeres una población minoritaria y reproduciéndose esta situación también entre los presos de procedencia extranjera que se hallan recluidos en el sistema penitenciario.

Por su parte, en la misma fuente, si identificamos la población considerada joven en prisión desde los 18 años hasta los 25 años (penada y preventiva, ver Tabla 2), esta representa el 8.4% de la población total penitenciaria, siendo el 7% mujeres frente a un 93% de hombres. Si se distingue por su situación procesal, los presos preventivos —personas pendientes de condena que se hallan en prisión— constituyen el 15.3% de la población total penitenciaria, siendo el 15.7% jóvenes, de los cuales el 91.8% son hombres y el 8.2% son mujeres. En el caso de los penados, el 7.1% son jóvenes y, de ellos, el 93.5% son hombres y el 6.5% son mujeres. De acuerdo con estos datos (Tabla 2), en el caso de los jóvenes, la desproporción de cantidad de hombres frente a las mujeres es bastante similar a la población general penitenciaria, si cabe con un punto más en la presencia de internas jóvenes; así como, en términos globales, los jóvenes en situación preventiva en prisión son 15.7%, un poco más del doble de aquellos ya condenados (7.1%), entre los que las mujeres también tienen 1.25 puntos por encima de la media global nacional. Esto refleja que cada vez más hay jóvenes inmersos en los procesos judiciales-penales pendientes de condena, así como un ligero aumento de la actividad delictiva femenina y, en consecuencia, mayor probabilidad de crecimiento poblacional carcelaria de jóvenes.

Siguiendo a la SGIP (2018), en la Tabla 3 se muestra la distribución de los reclusos según la tipología delictiva de acuerdo a las leyes vigentes (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, del Código Penal) con 45 208 reclusos/as y, según el Código Penal derogado existen 184 casos adicionales (de los cuales solo 8 son mujeres). Lamentablemente, estas estadísticas no distinguen los tramos de edad; a nivel global podemos destacar que los delitos más recurrentes son: en primer lugar, «contra el patrimonio y el orden socioeconómico» —que englobaría robos, hurtos, estafas, etc.— representa el 40.1% de las condenas, casi coincidiendo en frecuencia mujeres (40.5%) y hombres (40.1%); en segundo lugar, «contra la salud pública» con un 18.7% de casos —que en su mayor parte representan delitos de los distintos circuitos de producción, circulación o comercialización de sustancias ilegales—, de los que el 31% corresponde a las mujeres y el 17.8% a los hombres, siendo en el caso de las mujeres el segundo tipo de delito más importante y, en tercer lugar, a gran distancia se pueden destacar «delitos y faltas de violencia de género» (8.9%), «homicidio y sus formas» (7.5%) y «contra la libertad sexual» (6.7%), estos mayoritariamente cometidos por hombres, y en los que las víctimas son mujeres.

En cuanto a las medidas de protección de menores, en este trabajo se recoge información sobre las jóvenes presas que han pasado por procesos de acogimiento residencial o acogimiento familiar.

TABLA 1. Población penitenciaria general española y de procedencia extranjera.

	Total población penitenciaria		Procedencia: Extranjeros	
	N	%	N	%
Hombres	54 810	92.5	15 355	92.4
Mujeres	4432	7.5	1267	7.6
Total	59 242	100	16 622	100

Fuente: SGIP, 2018.

TABLA 2. Población reclusa penada y preventiva por grupos de edad, según sexo.

Grupos de edad	Penados			Preventivos		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Edades						
De 18 a 20 años	189	11	200	311	23	334
De 21 a 25 años	3065	215	3280	968	92	1060
De 26 a 30 años	5978	427	6405	1171	113	1284
De 31 a 40 años	14 803	1194	15 997	2617	280	2897
De 41 a 60 años	19 186	1604	20 790	2755	232	2987
De más de 60 años	2220	163	2383	278	13	291
Totales	45 441	3614	49 055	8100	753	8853

Fuente: SGIP, agosto 2018.

TABLA 3. Tipos de delitos de población general penitenciaria de acuerdo a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
1. Homicidio y sus formas	3376	7.5	295	8.2	3671	7.5
2. Lesiones	2239	5	156	4.3	2395	4.9
3. Contra la Libertad	563	1.2	44	1.2	607	1.2
4. Contra la Libertad Sexual	3231	7.1	43	1.2	3274	6.7
5. Contra el Honor	3	0.01	0	0	3	0.01
6. Delitos y Faltas de Violencia de Género	4333	9.6	9	0.3	4342	8.9
7. Contra las Relaciones Familiares	173	0.4	10	0.3	183	0.4
8. Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico	18119	40.1	1456	40.5	19575	40.1
9. Contra la Salud Pública	8023	17.8	1113	31	9136	18.7
10. Contra la Seguridad del Tráfico	1270	2.8	40	1.1	1310	2.7
11. Falsedades	627	1.4	97	2.7	724	1.5
12. Contra la Administración y Hacienda Pública	251	0.6	22	0.6	273	0.6
13. Contra la Administración de Justicia	745	1.6	109	3	854	1.7
14. Contra el Orden Público	1591	3.5	121	3.4	1712	3.5
15. Resto de Delitos	599	1.3	69	1.9	668	1.4
16. Por Faltas	32	0.1	7	0.2	39	0.08
17. No Consta Delito	33	0.1	4	0.1	37	0.08
Totales	45208		3595		48803	

Fuente: SGIP, 2018.

En nuestro país se asume la protección a la infancia fundamentalmente a través de la Constitución de 1978 (art. 39 y art. 48) y de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por las leyes 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Todas las medidas de protección² son decididas y ejecutadas por las instituciones públicas competentes en cada una de las Comunidades Autónomas, teniendo siempre como principio rector «el interés superior del menor», pero siempre bajo la vigilancia, y en su caso la autorización, por parte del Ministerio Fiscal (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018b).

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018b) los datos que gestiona el Observatorio de la Infancia en 2016 indican que el porcentaje de los menores de edad atendidos ha sufrido un incremento de casi un 3% (de 42 628 en 2015 a 43 902 en 2016). En términos absolutos, el acogimiento familiar es la principal medida de protección adoptada por los servicios de protección de comunidades y ciudades autónomas. Las diferencias por sexo más notables se dan en el acogimiento residencial, con un claro predominio de los varones en los grupos etarios 11-14 y 15-17. Por otra parte, en el caso de los acogimientos familiares se mantiene el predominio del grupo etario 11-14, sin que existan diferencias relevantes entre el número de niñas y el de niños.

En cuanto a las medidas judiciales con menores, en el caso de la comisión de ilí-

bitos penales contemplados en el Código Penal y en leyes especiales, se encuentran expresamente contempladas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM); la Ley Penal del Menor Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre y la Ley Orgánica 8/2012 de 27 de diciembre, que modificó el apartado 4º del art. 2 de la LORPM en cuestión de competencia territorial. Tanto el Tribunal Constitucional en sus distintas sentencias (sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo) como las leyes para los menores, emiten doctrinas y fundamentos encaminados a la adopción de unas medidas que, fundamentalmente, no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, valoradas con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas. Las condenas se denominan «medidas judiciales» y son diferentes a las establecidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicadas a los mayores de edad; se aplican a los menores distinguiendo dos tramos de edad: entre los 14 y menores de 16 años; y entre los 16 y menores de 18 años (Art.7, LORPM, 2000).

De acuerdo con el Observatorio de la Infancia (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018a), las medidas judiciales impuestas y notificadas a menores infractores entre los 14 y 21 años en 2016, teniendo como base el Art. 7 de la LORPM (Tabla 4), fueron: libertad vigilada (45%), prestaciones de beneficio de la comunidad (14%), internamiento (14%), realización de tareas socioeducativas (12%) y resto de

medidas (15%). El desglose por sexo nos muestra un 17% de medidas impuestas a mujeres y un 83% a hombres, es decir, por cada medida impuesta a una mujer hay

5.03 medidas impuestas a varones. En el caso de las medidas ejecutadas las cifras son muy parecidas tanto por medidas como por sexo (4.86 hombres por cada mujer).

Tabla 4. Medidas previstas en el Art. 7 (LRPM) notificadas y ejecutadas en el 2016.

	Notificadas	%	Ejecutadas	%
Total de internamientos	3450	14 %	4196	13 %
Libertad vigilada	11166	45 %	14753	45 %
Prestaciones en beneficio de la comunidad	3552	14 %	4238	13 %
Realización de tareas socioeducativas	2911	12 %	3841	12 %
Resto de medidas	3755	15 %	5523	17 %
Total	24834	100	32551	100

Fuente: Elaboración propia, a partir de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018a.

Estos datos reflejan un dato importante, al poner de relieve el crecimiento de casi el doble de la criminalidad de las mujeres en las jóvenes respecto a la población carcelaria femenina general adulta. De acuerdo con diferentes estudios, las chicas tendrían un patrón de conducta similar al de los chicos, y las conductas antisociales y delictivas serían más frecuentes cuando se tienen amigos que ya las han adoptado o viven en medios urbanos; sin embargo, el hecho de ser un joven emigrante o hijo de emigrantes no incrementaría el riesgo de adoptar estas conductas. Por otra parte, se presentan evidencias que señalan que los sujetos adictos a las drogas tienen una tasa de delincuencia mayor que los sujetos que no son drogadictos (Arnoso, 2005; CGPJ, 2008; Martínez, Carabaza y Hernández, 2008; Schulman, 2014).

2. Método

Los datos y análisis que se presentan se sitúan en el marco del proyecto de investigación I+D+I «Mujeres reclusas drogodependientes y su reinserción so-

cial», ref. EDU2009-13408, desarrollado en todo el territorio español, incluyendo Cataluña, única Comunidad Autónoma con competencias en materia penitenciaria. Se estudiaron las 11 Comunidades Autónomas —de las 17 existentes—, con mayor representatividad poblacional penitenciaria y representatividad territorial, a partir del contacto con 42 establecimientos penitenciarios. La población de interés son mujeres que se encuentran en el medio penitenciario clasificadas en 2º y 3º grado de cumplimiento de pena. Se excluye el tercer grado no residencial y liberadas condicionales, al no cumplir condena en prisión en el momento de la investigación.

Los datos fueron recogidos utilizando dos instrumentos (cuestionario y entrevista semiestructurada) a mujeres reclusas en cárceles españolas, entre los años 2011-2012. Se obtuvieron 538 cuestionarios válidos de mujeres y 61 entrevistas, contando con una muestra de 599 mujeres, que representa el 17.2% de la población penitenciaria femenina española (3484 internas) (SGIP, 2011).

Para el análisis realizado en este trabajo nos hemos centrado en los 538 cuestionarios, entre ellos revisamos la actividad delictiva de las jóvenes en prisión, y tomamos en consideración aquellas mujeres que habían pasado por distintas medidas de protección o judiciales cuando eran menores de edad. A partir de ahí, se han distinguido los siguientes subgrupos: mujeres que han estado en acogimiento residencial en un centro de protección de menores, $n=60$ (11.2%); mujeres que han sido acogidas por otra familia, $n=36$ (6.7%), y mujeres que han tenido medidas judiciales siendo menores de edad, $n=72$ (13.4%).

La metodología de la presente investigación combina métodos y análisis cualitativos y cuantitativos, incluyendo tablas de frecuencias, análisis de tablas de contingencia, contrastes de independencia y medidas de asociación. Los datos se han obtenido utilizando SPSS 24.0. Hay que resaltar que en este caso la muestra analizada está compuesta por un número poco elevado, siendo la muestra de mayor tamaño de 72 mujeres, lo que dificultó la realización de contrastes de hipótesis que verificaran las condiciones previas para poder aplicarlos.

3. Resultados y discusión

En total un 20.3% de las mujeres que han participado en el estudio tuvieron algún tipo de medida de protección cuando eran menores (en algún caso, pasaron por las dos medidas, acogimiento familiar y acogimiento residencial), lo que contrasta con la elevada presencia de situaciones de riesgo, muchas de ellas graves. En concreto, el porcentaje de reclusas que pasaron por acogimiento residencial en centros de

protección de menores es de un 11.2%, mientras que las que fueron acogidas por familias es más bajo, un 6.7%. Respecto a los antecedentes de medidas judiciales, podemos mencionar un porcentaje del 13.4% de las reclusas que tuvieron este tipo de medidas cuando eran menores de edad. Por último, un 14.9% de las reclusas del estudio ha pasado por alguna de las tres medidas (acogimiento residencial, acogimiento familiar y/o ha tenido medidas judiciales) siendo menor de edad.

Destaca el hecho de que el 55.6% (40 mujeres) de las que han tenido medidas judiciales siendo menores de edad ha residido en algún centro de protección de menores. En este caso, existe una relación significativa señalada por el contraste chi-cuadrado sobre la independencia de las variables, y se verifican las hipótesis necesarias, obteniendo un p -value $p < 0.001$. Se obtiene un cociente de ventajas $\theta = 27.81$ en la muestra, lo que quiere decir que la probabilidad de estar en acogimiento residencial frente a no estarlo es 27.81 veces mayor para las que han tenido medidas judiciales siendo menores de edad que para las que no las han tenido. Existe entre las dos variables una asociación positiva estadísticamente significativa.

En cuanto a la percepción de las jóvenes en prisión sobre las medidas que tuvieron cuando eran menores de edad, se constata lo siguiente:

Un 11.2% (60) de las jóvenes internas ha residido en un centro de protección de menores; de ellas, el 33.3% (20) considera que la experiencia en el centro le ayudó en su vida; cerca de dos tercios de las mujeres encuesta-

TABLA 5. Relación entre las medidas judiciales y los centros de protección.

		¿Ha tenido medidas judiciales en alguna ocasión siendo menor de edad?		Total
		Sí	No	
¿Ha residido en algún centro de protección de menores?	Sí	40 (55.6%)	20 (4.3%)	60
	No	32 (44.4%)	445 (95.7%)	477
Total		72	465	537

Fuente: Elaboración propia.

das manifiestan, sin embargo, que su experiencia en centros de protección de menores les ayudó poco o nada en su vida (66.7%, 40).

Un 6.7% (36) de las internas había sido acogida por una familia; de ellas, el 61.1% (22) considera que la experiencia le ayudó en su vida. El porcentaje de presas que han sido acogidas por familias es muy bajo y su valoración sobre este tipo de medida es bastante buena, de lo que podemos deducir que la acogida reconduce y supone un apoyo para estas mujeres.

Un 13.4% (72) de las mujeres reclusas ha tenido medidas judiciales en alguna ocasión siendo menor de edad; solo el 11.3% (8) de ellas considera que las medidas judiciales fueron de utilidad, y en contra el 88.8% (64) considera que esta medida no les ayudó nada o muy poco en su vida. Estos datos y los factores de riesgo analizados sobre toda la muestra (globales) y en las tres situaciones consideradas se reflejan en la Tabla 6.

En general, todas las variables analizadas presentan porcentajes más altos en los casos de mujeres con problemas delictivos en la adolescencia que para aquellas que

no han tenido esos problemas (datos globales). Destacan los porcentajes de mujeres que tienen o han tenido a familiares o a su pareja en la cárcel (entre el 48.3% y el 62.5%). El porcentaje de presas que tienen un nivel de estudios inferiores a la educación secundaria es algo mayor en los tres casos —acogimiento residencial, acogimiento familiar y medidas judiciales— que el porcentaje global, al igual que ocurre en el caso del desempleo, la reincidencia, los delitos contra la salud pública y por robo o la denuncia por malos tratos.

En este último caso, el contraste chi-cuadrado sobre la independencia de las variables es significativo ($p=0.0085$), y se verifican las hipótesis necesarias para poder aplicarlo. Es decir, que existe una asociación positiva significativa entre las mujeres que han tenido problemas judiciales siendo menores de edad y las que han puesto alguna denuncia por malos tratos (en general, hacia ellas). Con un cociente de ventajas de $\theta=1.83$, que indica que la probabilidad de que haya puesto alguna denuncia por malos tratos es 1.83 veces superior si ha tenido medidas judiciales que si no las ha tenido (ver Tabla 7).

TABLA 6. Situaciones de riesgo en mujeres reclusas cuando eran menores de edad.

	Globales (535)		Centro de protección de menores (60)		Acogida por otra familia (36)		Medidas judiciales (72)	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Porcentaje de jóvenes (hasta 25 años)	65	12.1	9	15	3	8.3	12	16.7
Estudios inferiores a secundaria	292	54.6	33	55	25	69.4	42	58.3
No tenía trabajo antes de entrar a prisión	212	39.6	21	35	15	41.7	31	43.1
Delito principal: robo	132	24.7	14	23.3	11	30.6	20	27.8
Delito principal: contra la salud pública	253	47.3	36	60	17	47.2	32	44.4
Familia en prisión	271	50.6	37	61.7	21	58.3	45	62.5
Pareja en prisión	291	54.2	29	48.3	22	61.1	40	55.6
Reincidente (no es su primer delito)	155	29	14	23.3	12	33.3	24	33.3
Ha puesto alguna denuncia por malos tratos	169	31.6	27	45	21	58.3	25	34.7

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 7. Relaciones entre las medidas judiciales y denuncias por malos tratos.

		¿Ha puesto alguna denuncia por malos tratos?		Total
		Sí	No	
¿Ha tenido problemas judiciales siendo menor de edad?	Sí	46	62	108
	No	121	299	420
Total		167	361	528

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 8. Nivel educativo y medidas de protección y/o judicial.

Nivel educativo	Muestra global		Acogimiento familiar		Centro de protección		Medidas judiciales	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin estudios	39	7.2	5	13.9	10	16.7	12	16.7
Primaria incompleta	83	15.4	11	30.6	10	16.7	12	16.7
Primaria completa	96	17.8	7	19.4	8	13.3	9	12.5
Secundaria incompleta	72	13.4	2	5.6	5	8.3	9	12.5
Secundaria completa	88	16.4	2	5.6	12	20	10	13.9
Formación Profesional	69	12.8	5	13.9	7	11.7	8	11.1
Bachillerato, COU	44	8.2	3	8.3	5	8.3	8	11.1
Estudios superiores	37	6.9	1	2.8	2	3.3	4	5.6
Otros/sistema	10	1.8	0	0	1	1.7	0	0
Total	538		36		60		72	

Fuente: Elaboración propia.

El análisis detallado de la situación educativa de las mujeres jóvenes en diferentes situaciones de protección indica (ver Tabla 8) que los datos educativos son, en este sentido, preocupantes, ya que en todos los casos son más bajos que la media nacional investigada (datos globales); por ejemplo, las mujeres sin estudios en la muestra global de la misma investigación representan el 7.2% frente al 13.9% en acogimiento familiar, el 16.7% en acogimiento residencial y en medidas judiciales, respectivamente, contando la mayor parte solo con estudios primarios. En el lado extremo, los estudios superiores en el dato global representan el 6.9%, frente al 2.8% en acogimiento familiar, 3.3% en acogimiento residencial y 5.6% en medidas judiciales; cifras que llaman la atención por ser considerablemente más bajas —excepto las de las mujeres con medidas judiciales— que las de la muestra global. Finalmente, la probabilidad de tener unos estudios inferiores a secundaria es del 69.4% en las jóvenes con medidas de protección o judiciales, mientras que el porcentaje de mujeres que tiene estudios inferiores a secundaria para los que no tienen medidas es el 56.6%. Es decir, la probabilidad de tener un nivel de estudios bajo es 1.22 veces mayor para las mujeres con medidas de protección o judiciales que las que no han tenido medidas.

En cuanto a las conductas adictivas o problemáticas con sustancias (ver Tabla 9), en los datos globales de la muestra —en la que la edad media de las mujeres que han sido acogidas es similar a las que no han sido acogidas— es muy evidente que aquellas tienen una presencia muy significativa (60.7%), así como un contexto familiar donde de la problemática con el alcohol y/u otras

sustancias ha sido una constante (52.7%). Si se centra el análisis en las distintas medidas, los porcentajes son aún más altos, por encima del 60%, especialmente por aquellas que han sido acogidas en otras familias (acogimiento familiar); en todos los casos, los consumos de alcohol y tabaco son altos, por encima del 80%, destacando las que han tenido medidas judiciales, que pueden responder, en general, a una situación social tolerada de estas sustancias; sin embargo, en todos los casos el consumo en los últimos treinta días del estudio es bajo, habiéndose producido un cambio de perfil adictivo en su vida penitenciaria.

En cuanto a las jóvenes reclusas que han residido en acogimiento residencial en algún centro de protección de menores, el 86.7% ha consumido alcohol y/o tabaco a lo largo de su vida y el 65% lo sigue haciendo en la actualidad; sin embargo, el 63.3% ha consumido otras drogas a lo largo de su vida y en la actualidad solo el 13.3% sigue consumiendo.

En cuanto a las jóvenes reclusas que han sido acogidas por otra familia cuando eran menores de edad, el 86.1% ha consumido alcohol y/o tabaco a lo largo de su vida y el 58.3% lo sigue haciendo en la actualidad; sin embargo, el 72.2% ha consumido otras drogas a lo largo de su vida y en la actualidad solo el 13.9% sigue consumiendo.

Finalmente, en cuanto a las jóvenes reclusas que han tenido alguna medida judicial siendo menores de edad, el 90.3% de ellas ha consumido alcohol y/o tabaco a lo largo de su vida y lo sigue haciendo el 65.3%. Y en cuanto a las drogas, ha consumido el 61.1% y lo sigue haciendo el 13.9%.

TABLA 9. Relación con las sustancias.

	Globales		Centro de protección		Acogimiento familiar		Medidas judiciales	
Consumo tabaco/alcohol a lo largo de la vida	471	88%	52	86.7%	31	86.1%	65	90.3%
Consumo tabaco/alcohol en la actualidad	354	66.1%	39	65%	21	58.3%	47	65.3%
Consumo de drogas a lo largo de la vida	325	60.7%	38	63.3%	26	72.2%	44	61.1%
Consumo de drogas en la actualidad	59	11%	8	13.3%	5	13.9%	10	13.9%
Algún familiar con problemas de alcohol/drogas	282	52.7%	35	58.3%	20	55.6%	39	54.2%

Fuente: Elaboración propia.

4. Discusión y conclusiones

Si bien la población de mujeres reclusas jóvenes 18-25 es extremadamente inferior a la de hombres (7% frente a 93%), el análisis de la incidencia de las medidas de protección y/o las medidas judiciales en el tránsito a prisión de las mujeres jóvenes que pasaron por esas situaciones cuando eran menores de edad, junto a la identificación de los factores de riesgo asociados al proceso, indican una compleja, difícil y preocupante situación.

Un 14.9% de estas mujeres jóvenes ha pasado por alguno de los tres escenarios contemplados —acogimiento residencial, acogimiento familiar y/o medidas judiciales— y solo las que pasaron por acogimiento familiar valoran positivamente la medida; las jóvenes que pasaron por un acogimiento residencial y las que tuvieron medidas judiciales rechazan estas situaciones, dudan de su utilidad para su vida y consideran que les ayudaron poco o nada en ella.

En cualquier caso, el bajo porcentaje de mujeres reclusas del estudio con antecedentes de medidas de protección (20.3%) y/o judiciales (13.4%) apunta a que no puede establecerse una relación directa entre existencia de esas medidas en la minoría de edad y pena de prisión en la mayoría de edad en la población global de mujeres reclusas, o lo que es lo mismo, que las menores con medidas de protección y/o judiciales solo en determinadas circunstancias acaban en prisión cuando son mayores de edad.

Lo que no es óbice para tener en cuenta que más de la mitad de las jóvenes reclusas (55.6%) ya inició ese recorrido hacia la prisión tras residir en algún centro de protección y pasar a su vez por el cumplimiento de medidas judiciales siendo menor de edad. En este sentido, de acuerdo con diferentes investigaciones (Graña, Garrido y González Cieza, 2007; Melendro, 2010), este dato se aleja en gran medida de los porcentajes estimados de menores que han tenido medidas de protección y que además han pasado por medidas judiciales, que se sitúan entre el 12% y el 16%.

En cuanto a los diferentes factores de riesgo, se constata la gravedad de la mayor parte de ellos en contraste con la situación de otras reclusas jóvenes que no tuvieron medidas de protección o, sobre todo, medidas judiciales. Para estas últimas, la familia y el entorno social en su mayor parte representan un factor de riesgo delictivo, al tener miembros de la familia en prisión —más del 58% de los casos—, al igual que en el caso de la pareja —más del 48% de los casos—. También se comprueba que existe una relación significativa estadísticamente entre las mujeres que han tenido problemas judiciales siendo menores de edad y las que han puesto alguna denuncia por malos tratos, especialmente hacia ellas. Los ambientes familiares son percibidos como negativos y violentos. Estos problemas familiares y personales son descritos por los trabajos de Novo-Corti, Barreiro-Gen y Espada (2014) como generadores de la desconexión existente entre las mujeres reclusas y la educación, dato que se corrobora en nuestro trabajo. Mapelli, Herrera y Sordi (2013) mencionan en su investigación como el 51% de las reclusas dijo ser víctima de malos tratos antes de entrar en la cárcel; el 37% afirmó que el causante fue el esposo/compañero y solo el 39% denunció a sus agresores.

Respecto a las conductas adictivas o problemáticas con sustancias, se constata una presencia muy significativa de ellas, así como un contexto familiar donde la problemática con el alcohol y/u otras sustancias ha sido una constante entre sus miembros. Cerca de dos terceras partes de las mujeres que pasaron por medidas de

protección y/o judiciales han tenido o tienen relación con las drogas, especialmente aquellas que han sido acogidas en otras familias (72.2%). En todos los casos los consumos de alcohol y tabaco son muy elevados, en más del 80% de los casos, siendo más frecuente por parte de las jóvenes que han tenido medidas judiciales (90.3%). Situación que es similar, e incluso mejor que la del resto de reclusos de nuestro país, quienes han tenido elevadísimos niveles de consumo de drogas legales (95.4%) e ilegales (70.8%) a lo largo de su vida y que mantienen elevados consumos —75.3% de drogas legales y 20.6% de drogas ilegales— durante su estancia en prisión (ES-DIP, 2016).

Por otra parte, en cuanto a los estudios de las jóvenes antes del paso por prisión, los datos son preocupantes ya que en general los estudios de las jóvenes con medidas de protección y/o judiciales son más bajos en todos los niveles educativos —la mayor parte sin estudios o solo estudios primarios, entre el 46% y el 62% en función del tipo de medida— que los de la muestra de jóvenes reclusas investigada que no pasaron por ese tipo de medidas; y son significativamente más bajos en el caso de las mujeres sin estudios y en todos los niveles inferiores a la educación secundaria.

Esto ocurre en el caso de las tres medidas y especialmente en las jóvenes que han pasado por acogimiento familiar. Sin embargo, dentro de su baja formación, las mujeres con medidas judiciales tienen un mejor nivel educativo, seguidas de aquellas que han estado en centros de

protección. Estos datos contrastan con los obtenidos en la investigación de Añaños, Llorente y Chávez (2016) con 60 jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 27 años; en ella se observó que una inmensa mayoría tenían el graduado escolar o que el último curso que habían estudiado se encontraba en el nivel de secundaria, con un porcentaje mucho más bajo de jóvenes solo con estudios primarios o cursos no acabados y solo una persona sin estudios ni formación; un pequeño porcentaje estaba además estudiando bachillerato, ciclos formativos de grado medio o FP1 o ciclos formativos de grado superior o FP2. Como señala Gil-Cantero (2013), difícilmente podemos referirnos a procesos de reeducación y reinserción de personas privadas de libertad si no se les proporciona la ayuda necesaria para mejorar su nivel cultural y un nivel educativo que acredite su capacitación.

La información recogida en este trabajo aporta nuevos y más detallados datos sobre factores de riesgo a investigaciones que, hasta ahora, planteaban que las causas o factores etiológicos de la actividad delictiva no están claramente definidos y responden a situaciones más genéricas, como la confluencia de múltiples factores personales, familiares y socio-ambientales, las desventajas iniciales de los y las jóvenes, la escasez de sus recursos o la ausencia de un entorno social acogedor que ofrezca los apoyos necesarios en caso de crisis o conflicto.

Como señalan diferentes autores (Mapelli, Herrera y Sordi, 2013; Del Pozo y Añaños-Bedriñana, 2013; Gar-

cía-Vita y Melendro, 2013), estas jóvenes en prisión reciben un tratamiento especial en sus procesos de reeducación y reinserción, pero es necesario mejorar aún los procesos de intervención, la atención parcelada que atiende a sus necesidades vitales de forma fragmentada y no global, así como el funcionamiento del propio sistema penitenciario. A partir de ahí, el reto para reconducir o cambiar esta situación queda abierto. La pedagogía y la educación social ofrecen algunas respuestas a partir de las que profundizar, dada la difícil situación descrita; desde las evidencias y la inmersión en los propios entornos, priorizando el proceso de la intervención no solo sobre la incidencia de los factores de riesgo detectados y descritos en este estudio, sino también a partir del fortalecimiento de los factores de protección y de un abordaje desde el buen trato y la resiliencia que consigan que las jóvenes reclusas vean incrementadas sus posibilidades de éxito e inclusión social.

Notas

¹ Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo; Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre; Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General; Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

² Tutela, guarda, privación de la patria potestad en cuanto a las medidas jurídicas; adopción, acogimiento familiar o acogimiento residencial fundamentalmente en cuanto al tipo de recurso que se puede proporcionar.

Referencias bibliográficas

- Abramovitz, M. (2017). *Regulating the Lives of Women. Social Welfare Policy from Colonial Times to the Present*. London: Routledge.
- Almeda, E. (2003). *Mujeres encarceladas*. Barcelona: Ariel.
- Almeda, E. (2017). Criminologías feministas, investigación y cárceles de mujeres en España. *Papers. Revista de Sociología*, 102 (2), 151-181.
- Añaños-Bedriñana, F. (2013). Formación educativa previa ante las discriminaciones: las mujeres reclusas en España. *Revista de Educación*, 360, 91-118.
- Añaños-Bedriñana, F. T. (2017). Definición de los perfiles de adicción y rasgos de consumo en mujeres reclusas. En F. T. Añaños-Bedriñana (Dir.), *En prisión. Realidades e intervención socioeducativa y drogodependencias en mujeres* (pp. 37-55). Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.
- Añaños-Bedriñana, F., Llorente, L. y Chávez, M. (2016). Educación y reinserción de los jóvenes en prisión. *RES*, 22, 262-277.
- Aristizábal, L. M. (2017). *Prácticas sociales que promueven el delito y/o el desistimiento en mujeres privadas de la libertad* (Tesis doctoral). Recuperada del depósito legal de documentos de la Universitat Autònoma de Barcelona <https://ddd.uab.cat/record/187676>
- Arnosó, A. (2005). *Cárcel y trayectorias psicosociales: actores y representaciones sociales*. San Sebastián: Alberdania S.L.
- Belnap, J. (2006). The gendered nature of risk factors for delinquency. *Feminist Criminology*, 1 (1), 48-71.
- Burman, M. J., Batchelor, S. A. y Brown, J. A. (2001). Researching girls and violence. *British Journal of Criminology*, 41, 443-459.
- CGPJ (2008). *Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España*. Ciudad Real: Consejo General del Poder Judicial / Centro de Investigación en Criminología, Universidad de Castilla La Mancha.
- Chesney-Lind, M. y Pasko, L. (2013). *The female offender: girls, woman, a crime*. California: SAGE.
- Constitución Española de 1978, art. 39 y art. 48. *Boletín Oficial del Estado*, 311, de 29 de diciembre de 1978, páginas 29313 a 29424. Recuperado de [https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)) (Consultado el 27/03/2019).
- Cruells, M. y Igareda, N. (2005). *MIP: Mujeres, integración y prisión*. Barcelona: Aurea Editores.
- Del Pozo, F. J. y Añaños-Bedriñana, F. (2013). La Educación Social Penitenciaria: ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? *Revista Complutense de Educación*, 24 (1), 47-68.
- Durán, L. M. (2009). Apuntes sobre criminología feminista. *Revista Jurídica del Departamento de Derecho, Academia de Derecho Administrativo*, Tercera Época, 2 (1). Recuperado de <http://www.derechorevistajuridica.uson.mx/revistas/articulos/1-art03.pdf> (Consultado el 02/04/2019).
- ESDIP (2016). *Encuesta sobre salud y consumo de drogas en internados en instituciones penitenciarias*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones.
- García-Vita, M. y Melendro, M. (2013). El ambiente en prisión: La atención recibida por las reclusas y las relaciones intramuros. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 22, 43-56.
- Gil Cantero, F. (2013). Derechos humanos y reeducación en las prisiones. El derecho a la educación en el modelo «Good Lives». *Revista de Educación*, 360, 48-68.
- Graña, J., Garrido, V. y González Cieza, L. (2007). Evaluación de las características delictivas de los menores infractores de la Comunidad de Madrid y su influencia en la planificación del tratamiento. *Psicología Clínica Legal y Forense*, 7, 7-18.
- Juliano, D. (2010a). La criminalización de las mujeres. Estigmatización de las estrategias femeninas para no delinquir. En F. T. Añaños (Coord.), *Las mujeres en las prisiones. La Educación Social en contextos de riesgo y conflicto* (pp. 25-44). Barcelona: Gedisa.
- Juliano, D. (2010b). Delito y pecado. La transgresión en femenino. En *Encarceladas*. Recuperado de http://www.feministas.org/IMG/pdf/dossier_encarceladas_5_.pdf (Consultado el 02/04/2019).
- Ley de Enjuiciamiento Criminal. *Boletín Oficial del Estado*, 260, de 17 de septiembre de 1882, páginas 803 a 806. Recuperado de [https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/(1)) (Consultado el 27/03/2019).

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. *Boletín Oficial del Estado*, 281, de 24 de noviembre de 1995, páginas 33987 a 34058. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10> (Consultado el 27/03/2019).
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor modificada por las leyes 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y Orgánica 8/2015, de 22 de julio. *Boletín Oficial del Estado*, 175, de 23 de julio de 2015, páginas 61871 a 61889. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222 (Consultado el 27/03/2019).
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). *Boletín Oficial del Estado*, 11, de 13 de enero de 2000, páginas 1422 a 1441. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/12/5> (Consultado el 27/03/2019).
- Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. *Boletín Oficial del Estado*, 55, de 5 de julio de 2010, páginas 21001 a 21014. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/03/03/2> (Consultado el 27/03/2019).
- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *Boletín Oficial del Estado*, 152, de 23 de junio de 2010, páginas 54811 a 54883 97858 a 97921. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/06/22/5> (Consultado el 27/03/2019).
- Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. *Boletín Oficial del Estado*, 25, de 29 de enero de 2011, páginas 9504 a 9523. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2011/01/28/2> (Consultado el 27/03/2019).
- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *Boletín Oficial del Estado*, 77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27061 a 27176. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/1> (Consultado el 27/03/2019).
- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. *Boletín Oficial del Estado*, 101, de 28 de abril de 2015, páginas 36569 a 36598. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4> (Consultado el 27/03/2019).
- Ley Penal del Menor Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre y la Ley Orgánica 8/2012 de 27 de diciembre, que modificó el apartado 4º del art. 2 de la LORPM en cuestión de competencia territorial. *Boletín Oficial del Estado*, 290, de 5 de diciembre de 2006, páginas 42700 a 42712. Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/12/04/8> (Consultado el 27/03/2019).
- Mapelli, B., Herrera, M. y Sordi, B. (2013). La exclusión de las excluidas. ¿Atiende el sistema penitenciario a la necesidad de género?: una visión andaluza. *Estudios Penales y Criminológicos*, 33, 59-95.
- Martínez, P., Carabaza, R. y Hernández, A. (2008). Factores de riesgo predisponentes a la delincuencia en una población penal femenina. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 13 (2), 301-318.
- Melendro, M. (2010). *El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social*. Madrid: UNED.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018a). *Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a los menores infractores. Boletín núm. 16, Datos 2016*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Observatorio de la Infancia.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018b). *Boletín de datos estadísticos de medidas de protección. Boletín núm. 19, Datos 2016*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Observatorio de la Infancia.
- Novo-Corti, I., Barreiro-Gen, M. y Espada, B. (2014). Mujeres reclusas y el papel de la educación. *Revista Educativa Hekademos*, 16, 7.
- Simon, R. y Ahn-Redding, H. (2005). *The crimes women commit: the punishment they received*. Oxford: Lexington Books.
- SGIP (2011). *Población reclusa penada según grado de tratamiento*. Recuperado de <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=-TES&am=2011&mm=6&tm=GRAD&tm2=-GENE> (Consultado el 02/04/2019).

SGIP (2018). *Estadística penitenciaria*. Agosto de 2018. Recuperado de <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=2018&m-m=8&tm=GENE&tm2=GENE> (Consultado el 02/04/2019).

Smart, C. (1995). *Law, crime and sexuality, Essays in Feminism*. Londres: Sage Publications Ltd.

Smart, C. (2013). *Women, Crime and Criminology (Routledge Revivals)*. Londres: Routledge.

Schulman, D. (2014). Drogas y criminalidad. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminológica*, 13. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5030250> (Consultado el 02/04/2019).

Tortosa, J. M. (2009). Feminización de la pobreza y perspectiva de género. *RIO, Revista Internacional de Organizaciones*, 3, 71-89.

Tribunal Constitucional, sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo. *Boletín Oficial del Estado*, 98, de 25 de abril de 1995, páginas 7 a 15. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1995-10061> (Consultado el 27/03/2019).

Biografía de los autores

Fanny T. Añaños-Bedriñana es Licenciada en Educación y Doctora en Pedagogía. Actualmente es Profesora Titular del Departamento de Pedagogía y Subdirectora del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granada. Tiene como líneas de investigación la pedagogía/educación social, el medio penitenciario, las drogodependencias y adicciones, entre otras. Ha dirigido diversos proyectos de innovación docente y de investigación.

 <https://orcid.org/0000-0001-7515-1987>

Miguel Melendro es Doctor en Educación y Profesor Titular del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED, Co-director del

grupo de investigación de la UNED TABA - International Research sobre inclusión social y derechos humanos, Director del Máster en acción socioeducativa con colectivos vulnerables: familia, infancia, adolescencia y juventud de la Facultad de Educación de la UNED, Investigador invitado en diferentes universidades y autor de más de un centenar de publicaciones.

 <https://orcid.org/0000-0003-3035-9412>

Rocío Raya Miranda es Diplomada en Estadística, Licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas y Doctora en Estadística. Actualmente es Profesora Contratada Doctora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada. Sus trabajos de investigación se han centrado en la inferencia no paramétrica, la metodología *bootstrap* y los métodos de suavizado.

 <https://orcid.org/0000-0002-2846-1592>

Sumario*

Table of Contents**

Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales

Educational and civic-penal responses to antisocial behavior

Editor invitado: Fernando Gil Cantero
Guest editor: *Fernando Gil Cantero*

Fernando Gil Cantero

Presentación: Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales

Introduction: Educational and civic-penal responses to antisocial behavior

209

David Reyero, Fernando Gil Cantero

La educación que limita es la que libera

Education that limits is education that frees

213

María José Bernuz Beneitez, Esther Fernández Molina

La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores

The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice

229

Marina Martins, Carolina Carvalho

¿En qué mienten los adolescentes?

What do teenagers lie about?

245

Inmaculada Méndez, Cecilia Ruiz Esteban, Juan Pedro Martínez, Fuensanta Cerezo

Ciberacoso según características sociodemográficas y académicas en estudiantes universitarios

Cyberbullying according to sociodemographic and academic characteristics among university students

261

Irene Montiel, José R. Agustina

Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores

Educational challenges of emerging risks in cyberspace: foundations of an appropriate strategy for preventing online child victimization

277

Maialen Garmendia Larrañaga, Estefanía Jiménez Iglesias, Nekane Larrañaga Aizpuru

Bullying y ciberbullying: victimización, acoso y daño.

Necesidad de intervenir en el entorno escolar

Bullying and cyberbullying: victimisation, harassment, and harm. The need to intervene in the educational centre

295

Ana Rosser-Limiñana, Raquel Suriá-Martínez

Adaptación escolar y problemas comportamentales y emocionales en menores expuestos a violencia de género

School adaptation and behavioural and emotional problems in minors exposed to gender violence

313

* Todos los artículos están también publicados en inglés en la página web de la revista: <https://revistadepedagogia.org>.

** All the articles are also published in English on the web page of the journal: <https://revistadepedagogia.org>.

**Fanny T. Añaños-Bedriñana, Miguel Melendro, Rocío
Raya Miranda**

Mujeres jóvenes con medidas de protección y
judiciales y sus tránsitos hacia la prisión

*Young women with protective and judicial measures and their
transit towards prison* **333**

Reseñas bibliográficas

Esteban Bara, F. *Ética del profesorado* (Juan
García Gutiérrez). **García Amilburu, M., Bernal,
A. y González Martín, M. R.** *Antropología de la
educación. La especie educable* (Yaiza Sánchez
Pérez). **Rose, D. y Martin, J. R.** *Leer para aprender.
Lectura y escritura en las áreas del currículo* (Francisco
Lorenzo Bergillos). **Buxarrais, M. R. y Vilafranca, I.
(Coords.)**. *Una mirada femenina de la educación moral*
(Eric Ortega González). **351**

Informaciones

«ECER conference Education in an Era of Risk—the
Role of Educational Research for the Future» —de la
European Educational Research Association (EERA)—;
III Congreso «European Liberal Arts and Core Texts
Education»; VIII Congreso del Jubilee Centre for
Character and Virtues: «Virtues and the Flourishing
Life»; XLV Congreso Internacional de AME 2019:
«Morality and Ethics for the Digital World»; III Premio
Ricardo Marín Ibáñez; **Una visita a la hemeroteca
(profesores youtubers)** (Daniel Pattier); **Una visita a
la red** (David Reyero). **365**

Instrucciones para los autores

Instructions for authors **375**



ISSN: 0034-9461 (Impreso), 2174-0909 (Online)

<https://revistadepedagogia.org/>

Depósito legal: M. 6.020 - 1958

INDUSTRIA GRÁFICA ANZOS, S.L. Fuenlabrada - Madrid

Young women with protective and judicial measures and their transition towards prison

Mujeres jóvenes con medidas de protección y judiciales y sus tránsitos hacia la prisión

Fanny T. AÑAÑOS-BEDRIÑANA, PhD. Associate Professor. Universidad de Granada (fanntab@ugr.es).

Miguel MELENDRO, PhD. Associate Professor. Universidad Nacional de Educación a Distancia (mmelendro@edu.uned.es).

Rocío RAYA MIRANDA, PhD. Assistant Professor. Universidad de Granada (rroya@ugr.es).

Abstract:

The aim of this work is to analyse the influence of protective and/or judicial measures on the transit to prison of young women who have been through these situations as minors, starting by identifying risk factors associated with the process. Consequently, it provides new verified benchmarks for intervention with the population of young women in prison.

To this end, qualitative and quantitative *methods* are used with a sample of 599 female inmates from 42 Spanish prisons, to whom 538 surveys and 61 interviews were applied. Three subsamples were selected: protection centres

(n = 60); foster care (n = 36), and judicial measures (n = 72). A descriptive and interpretative study was carried out using frequency analysis, contingency tables, independence tests, and measures of association.

The results show that 20.3% of young women in prison have a prior history of institutionalisation in protective measures and 13.4% with judicial measures. The main risk factors identified are: low educational levels (69.4% below secondary education), environments with family members or partners in prison (between 48% and 63.2%), addictions (drugs and alcohol), either personal or affect-

Acknowledgements: This work is part of the framework of the “Reinsertion and accompanying of women on parole” research project (REINAC), Ref. EDU2016-9322-, funded by the Spanish government’s Ministry of Economy, Industry, and Competitiveness (MINECO), the Spanish Research Agency (AEI), and the ERDF, 2016-2019.

Revision accepted: 2019-02-15.

This is the English version of an article originally printed in Spanish in issue 273 of the **revista española de pedagogía**. For this reason, the abbreviation EV has been added to the page numbers. Please, cite this article as follows: Añaños-Bedriñana, F. T., Melendro Estefanía, M., & Raya Miranda, R. (2019). Mujeres jóvenes con medidas de protección y judiciales y sus tránsitos hacia la prisión | *Young women with protective and judicial measures and their transition towards prison*. *Revista Española de Pedagogía*, 77 (273), 333-350. doi: <https://doi.org/10.22550/REP77-2-2019-05>

<https://revistadepedagogia.org/>

ISSN: 0034-9461 (Print), 2174-0909 (Online)

revista española de pedagogía
year 77, n. 273, May-August 2019, 333-350



ing family members (over 60%), and a significant relationship between young people who experienced judicial measures as minors having made reports of abuse.

In the *discussion and conclusions*, growth in criminal behaviour by young people, especially women, is evident. Regarding the group studied, the low valuation of their time in protection centres and judicial measures by the imprisoned women, the difficulty of their family and affective background, and their worryingly low levels of education are striking. These data support the bases for evaluating the early impact on processes of transit towards prison and the options for socio-educational intervention aimed at reintegration and inclusion.

Keywords: youth, women, gender, child protection, juvenile delinquency, risk factor, prison, education.

Resumen:

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las medidas de protección y/o judiciales en el tránsito a prisión de las mujeres jóvenes que pasaron por esas situaciones cuando eran menores de edad, a partir de la identificación de los factores de riesgo asociados al proceso. Aportando así nuevos y contrastados elementos de referencia para la intervención con el colectivo de mujeres jóvenes en prisión.

Para ello se combinan métodos cualitativos y cuantitativos, en una muestra de 599 mujeres reclusas, a quienes se realizaron 538 encuestas y 61 entrevistas, de 42 centros penitenciarios

españoles. Se seleccionaron tres submuestras: centros de protección (n=60); acogimiento familiar (n=36) y medidas judiciales (n=72). Se realizó un estudio descriptivo e interpretativo mediante análisis de frecuencias, tablas de contingencia, contrastes de independencia y medidas de asociación.

Los resultados muestran que un 20.3% de las jóvenes en prisión han tenido historias previas de institucionalización a partir de medidas de protección y un 13.4% medidas judiciales. Los principales factores de riesgo identificados son: baja formación educativa (69.4% inferior a educación secundaria), contextos familiares y de pareja con miembros en prisión (entre 48% y 63.2%), adicciones (drogas y alcoholismo) tanto familiar como personales (más del 60%) y, relación significativa de denuncias de malos tratos por las jóvenes que tuvieron medidas judiciales cuando eran menores.

En la discusión y las conclusiones se resalta la evidencia del crecimiento delictivo de los jóvenes, especialmente mujeres. Respecto al grupo estudiado se destaca la baja valoración de las reclusas de su estancia en centros de protección y en medidas judiciales, la gravedad de los antecedentes familiares y afectivos y, la preocupación por sus bajos niveles formativos. Datos que refuerzan las bases de evaluación de la incidencia temprana en los procesos de tránsito a la prisión y las posibilidades de intervención socioeducativa orientada a la reinserción e inclusión.

Descriptorios: joven, mujer, género, protección a la infancia, delincuencia juvenil, factor de riesgo, prisión, educación.

1. Introduction

The aim of this work is to analyse the impact of protection measures and/or judicial measures in the transit to prison of young women who experienced these situations as minors, by identifying the risk factors associated with this process. Identifying these risk factors provides highly relevant information for evaluating their early impact on young women's process of transit to prison and, at the same time, enables advances in options for socioeducational intervention with them, such as an educational space directed at their reinsertion and inclusion.

Imprisonment in itself has significant negative impacts for women, as in their case the burden and associated moral, family, and social sanctions owing to traditional gender roles add to the stigma of being a criminal (Durán 2009; Juliano, 2010a; Añaños-Bedriñana, 2013; Smart, 2013; Aristizábal, 2017; Almeda, 2017). As for offending by the women, conventional theories focus on individual characteristics attributed to elements such as sexuality and traditional stereotypes (Smart, 1995; Burman, Batchelor, & Brown, 2001; Belnap, 2006; Chesney-Lind & Pasko, 2013; Almeda, 2017). Significant contributions on the subject based on a gender perspective, highlight women's position in the structure of society and their structural vulnerability, emphasising, among other elements, ones relating to the psychological masculinisation of women, increased participation by women in public affairs, the feminisation of poverty, and less bias in official responses to female

offending (Simon & Ahn-Redding, 2005; Tortosa, 2009; Juliano, 2010b; Abramowitz, 2017).

With regards to the situation of young women in prison, if they commit offences after turning 18, the valid penal code applies to them (Organic Law 10/1995, of 23 November and others¹) and they can be sentenced to alternative measures to prison or enter the normal prison system run by the justice and security agencies of the state; in these prisons they are placed in special modules exclusively for them.

Analysing prison from a gender perspective reveals the inequalities in the social context linked to each social situation and the prevailing female role in each era. In contemporary Western societies, social exclusion is one of the most common explanations for the female criminal profile (Cruells & Igareda, 2005; Juliano, 2010a; Añaños-Bedriñana, 2013; Almeda, 2003, 2017), the features and characteristics of which are analysed in this work from the perspective of risk factors.

The data presented below show the current prison population in figures. In August 2018, Spain's total prison population was 59,242. Of this population, 92.5% were men and 7.5% women (SGIP; 2018). Furthermore, 16,622 inmates were foreign (28.1% of the total), of which 92.4% were men and 7.6% women. These data are very revealing regarding the significant gender disparity in the prison population; women are a minority

of the people held in the prison system, and this is also the case for place of origin (foreigners).

In turn, if, from the same source, we identify the prison population classified as young—aged between 18 and 25—including those convicted and those on remand (see Table 2), this represents 8.4% of the total prison population, 7% of them being women and 93% men. Distinguishing by procedural position, prisoners on remand—people in prison awaiting trial—comprise 15.3% of the total prison population. Of them, 15.7% are classed as young, and 91.8% of these young prisoners are male men and 8.2% female. In the case of inmates who have been convicted, 7.1% are young, and of them, 93.5% are male and 6.5% are female. According to these data (Table 2), in the case of young people, the disparity in the ratio of men to women is broadly similar to the general prison population, with the presence of young female inmates being one percentage point higher. Overall, the proportion of young people on remand in prison is 15.7%, slightly over double the proportion of young people have been convicted (7.1%), among which women are also 1.25 percentage points above the national overall average. This reflects the fact that there are ever more young people involved in judicial-penal cases awaiting trial, as well as a slight increase in female offending and, consequently, a greater probability of growth in the prison population of young people.

According to SGIP (2018), Table 3 shows the distribution of inmates by type

of offence in accordance with the laws in force (Organic Law 10/1995, of 23 November, regarding the Penal Code and Organic Law 1/2015, of 30 March, regarding the Penal Code) with 45,208 inmates, and, in accordance with the repealed Penal Code, there are 184 additional cases (of which only eight are women). Unfortunately, these statistics do not distinguish by age range; overall, it should be noted that the most frequent offences are: firstly, “against property and the social and economic order”—including theft, fraud, etc.—representing 40.1% of convictions, with almost the same frequencies for women (40.5%) and men (40.1%); secondly, “against public health” with 18.7% of cases—which are mainly offences relating to the different circles of production, distribution, and sale of illegal substances—of which 31% correspond to women and 17.8% to men, this being the second most frequent type of offence among women; and, thirdly, at a considerable distance there are “gender violence offences” (8.9%), “homicide and its variants” (7.5%), and “offences against sexual freedom” (6.7%), mainly committed by men with women as victims.

Regarding protection measures for minors, in this work information is collected about young people in prison who have passed through institutional care or fostering processes. In Spain, protection for children is fundamentally governed by the Constitution of 1978 (sec. 39 and sec. 48) and Organic Law 1/1996, of 15 January, regarding Legal Protection for Children and Adolescents, amended by Law 26/2015, of 28 July, Modifying the System

TABLE 1. General and foreign-origin prison population in Spain.

	Total prison population		Origin: Foreigners	
	N	%	N	%
Men	54 810	92.5	15 355	92.4
Women	4432	7.5	1267	7.6
Total	59 242	100	16 622	100

Source: SGIP, 2018.

TABLE 2. Prison population on remand and convicted by age group and gender.

Age groups	Convicted			Remand		
	Men	Women	Total	Men	Women	Total
18 a 20	189	11	200	311	23	334
21 a 25	3065	215	3280	968	92	1060
26 a 30	5978	427	6405	1171	113	1284
31 a 40	14 803	1194	15 997	2617	280	2897
41 a 60	19 186	1604	20 790	2755	232	2987
Over 60	2220	163	2383	278	13	291
Total	45 441	3614	49 055	8100	753	8853

Source: SGIP, August 2018.

TABLE 3. Types of offence of the general prison population in accordance with Spanish Organic Law 10/1995, of 23 November, regarding the Penal Code.

Organic Law	Men		Women		Total	
	N	%	N	%	N	%
1. Homicide and its variants	3376	7.5	295	8.2	3671	7.5
2. Injuries	2239	5	156	4.3	2395	4.9
3. Against freedom	563	1.2	44	1.2	607	1.2
4. Against sexual freedom	3231	7.1	43	1.2	3274	6.7
5. Against honour	3	0.01	0	0	3	0.01
6. Gender violence	4333	9.6	9	0.3	4342	8.9
7. Against family relations	173	0.4	10	0.3	183	0.4
8. Against property and the social and economic order	18119	40.1	1456	40.5	19575	40.1
9. Against public health	8023	17.8	1113	31	9136	18.7
10. Against the safety of traffic	1270	2.8	40	1.1	1310	2.7
11. Falsehoods	627	1.4	97	2.7	724	1.5
12. Against the public authorities and tax authorities	251	0.6	22	0.6	273	0.6
13. Against the justice system	745	1.6	109	3	854	1.7
14. Against public order	1591	3.5	121	3.4	1712	3.5
15. Other offences	599	1.3	69	1.9	668	1.4
16. For minor offences	32	0.1	7	0.2	39	0.08
17. No offence listed	33	0.1	4	0.1	37	0.08
Total	45208		3595		48803	

Source: SGIP, 2018.

of Protection for Children and Adolescents and Organic Law 8/2015, of 22 July, Modifying the System of Protection for Children and Adolescents. All protection measures² are decided on and implemented by the competent public institutions in each Autonomous Region, always with the “best interest of the minor” as the guiding principle, but always under the vigilance and, where appropriate, authorisation of the State Counsel’s Office (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018b).

According to Spain’s Ministry of Health, Social Services, and Equality (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018b), the data managed by the Observatory on Children in 2016 show that the percentage of minors dealt with increased by almost 3% (from 42,628 in 2015 to 43,902 in 2016). In absolute terms, fostering is the main protection measure adopted by the protection services of Spain’s Autonomous Regions and Cities. The most noticeable gender differences are found in residential care, with a clear prevalence of boys in the 11-14 and 15-17 age groups. Conversely, the 11-14 age group is predominant in the case of fostering, without significant differences between the number of boys and girls.

As for judicial measures with minors, in the event of perpetration of illegal actions covered by the Penal Code and the specific laws, they are expressly covered by Organic Law 5/2000, of 12 January, Regulating the Criminal Liability of Minors (LORPM); the Organic Law 8/2006 of 4 December

and Organic Law 8/2012 of 27 December, which amended paragraph 4 of section 2 of the LORPM regarding territorial jurisdiction. Both Spain’s Constitutional Court, in various judgments (judgments 36/1991, of 14 February and 60/1995, of 17 March), and the laws regarding minors, have produced legal principles and reasonings focussing on the adoption of measures which, fundamentally, should not be repressive, but instead preventive-specific, directed at the effective reinsertion of children and their best interests, evaluated with criteria which must fundamentally be sought in the field of non-legal sciences. Sentences are referred to as “judicial measures” and differ from those laid down in the Penal Code and Criminal Procedure Law applying to adults; they are applied to minors distinguishing between two age groups: 14-15 and 16-17 (Sec. 7, LORPM, 2000).

According to the Observatory of Childhood (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018a), the legal measures imposed and notified for young offenders aged between 14 and 21 in 2016, on the basis of Sec. 7 of the LORPM (Table 4), were: probation (45%), community service (14%), imprisonment (14%), carrying out socio-educational tasks (12%), and other measures (15%). The breakdown by gender shows 17% of measures imposed on female offenders and 83% on male offenders. In other words, for each measure imposed on a female offender, 5.03 measures are imposed on male offenders. In the case of the measures carried out, the figures are very similar, both for measures and by gender (4.86 men per woman).

TABLE 4. Measures laid down in Sec. 7 (LORPM) notified and imposed in 2016.

	Notified	%	Imposed	%
Total imprisonment	3450	14%	4196	13%
Probation	11166	45%	14753	45%
Community service	3552	14%	4238	13%
Carrying out socio-educational tasks	2911	12%	3841	12%
Other measures	3755	15%	5523	17%
Total	24834	100	32551	100

Source: Own elaboration, based on Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018a.

These data show an important detail as they illustrate that criminal activity by young women has nearly doubled compared with the general female adult prison population. According to various studies, female adolescents have a similar pattern to the behaviour of male adolescents, with antisocial and delinquent behaviour being more frequent when people have friends who have already adopted it or when living in urban environments. However, being a young migrant or the child of migrants does not increase the risk of adopting this behaviour. On another note, evidence has been presented which suggests that drug addicts have higher offending rates than people who are not addicted to drugs (Arnosó, 2005; CGPJ, 2008; Martínez, Carabaza, & Hernández, 2008; Schulman, 2014).

2. Method

The data and analyses presented are part of the framework of the “Drug-addicted female prisoners and their social reinsertion” research project, Ref.

EDU2009-13408, developed in all of Spain, including Catalonia, the only Autonomous Region with competences in penal matters. Eleven Spanish Autonomous Regions were studied, from the total of 17, with the most representative prison populations and geographical representativeness, based on contact with 42 correctional establishments. The population of interest is women who are in prison classified as being in the second or third degree of serving their sentence. The third degree —non-residential— and women on parole are excluded, as they were not serving their sentence in prison at the time of the research.

The data were collected using two instruments (a questionnaire and semi-structured interviews) with women held in Spanish prisons between 2011 and 2012. A total of 538 valid questionnaires were returned by the women and 61 interviews were held, with a sample of 599 women, representing 17.2% of Spain’s female prison population (3,484 inmates) (SGIP, 2011).

The analysis carried out in this work focussed on the 538 questionnaires. In them, the criminal activity of the young women in prison was reviewed, and the women who had passed through different protective measures or judicial measures as minors were taken into consideration. Based on this, the following subgroups were established: women who have been in residential care in a youth protection centre, $n = 60$ (11.2%), women who were fostered by another family, $n = 36$ (6.7%), and women who had judicial measures as minors, $n = 72$ (13.4%).

This research's methodology combines qualitative and quantitative methods and analysis, including frequency tables, contingency table analysis, independence tests, and measures of association. The data were extracted using SPSS 24.0. It should be noted that in this case the sample analysed comprises a number of small groups, with the largest sample containing 72 women. This made it difficult to carry out hypothesis tests and verify the conditions for being able to apply them.

3. Results and discussion

In total, 20.3% of the women who participated in the study had some sort of protection measure as minors (in some cases, they experienced both measures: fostering and residential care). This contrasts with the high presence of risk situations, many of them serious. Specifically, 11.2% of inmates passed through residential care in youth protection centres, while a lower percentage (6.7%) were fostered. As for a record of judicial measures, 13.4%

of the inmates had this type of measure as minors. Finally, 14.9% of the inmates in the study had passed through one or more of the three measures (residential care, fostering, and/or judicial measures) as a minor.

It is especially noticeable that 55.6% (40 women) of those who had judicial measures as minors were residents in a youth protection centre. In this case, there is a significant relationship identified by the chi-squared test of independence and the necessary conditions are verified, with a p-value of $p < 0.001$. An odds ratio of $\theta = 27.81$ is obtained for the sample, which means that the probability of being in residential care compared with not being in it is 27.81 times higher for those who have had judicial measures as minors than for those who have not had them. There is a statistically significant positive association between the two variables.

Regarding the young prison inmates' perceptions of the measures they had as minors, the following was found:

11.2% (60) of the young inmates had been resident in a youth protection centre; of these, 33.3% (20) believed that the experience in the centre helped them in their life; however, around two thirds of the women surveyed stated that their experience in youth protection centres was of little or no help in their life (66.7%, 40).

Of the inmates, 6.7% (36) had been in foster care. Of these, 61.1% (22) considered that the experience helped in their life.

TABLE 5. Relationship between judicial measures and protection centres.

		Did you have judicial measures on any occasion as a minor?		Total
		Yes	No	
Have you been resident in a youth protection centre?	Yes	40 (55.6%)	20 (4.3%)	60
	No	32 (44.4%)	445 (95.7%)	477
Total		72	465	537

Source: Own elaboration.

The percentage of inmates who were fostered by families is very low and their view of this type of measure is quite positive, from which it can be concluded that fostering redirects these women and is of support for them.

Of the female inmates, 13.4% (72) had judicial measures on some occasion as a minor; only 11.3% (8) of them consider that the judicial measures were useful, and 88.8% (64) consider that this measure did not help them at all or was of little help in their life.

These data and the risk factors analysed for the whole sample (overall) and on the three situations considered are shown in Table 6.

In general, higher percentages can be seen in all of the variables analysed in the cases of women with offending problems in adolescence than with those who did not have these problems (overall data). The figures for women who have or have had family members or a partner in prison stand out (between 48.3% and 62.5%). The percentage of inmates with a level of education lower than secondary education

is somewhat greater in the three cases — residential care, foster care, and judicial measures— than the overall percentage. This is also the case for unemployment, recidivism, offences against public health and for theft or reporting abuse.

In the latter case, the chi-squared test of independence is significant ($p = 0.0085$), and the necessary conditions for applying it are confirmed. In other words, there is a significant positive association between women who have had judicial problems as minors and those who have reported cases of domestic abuse (in general, towards them). This odds ratio is $\theta = 1.83$, which indicates that the probability of having made a report of abuse is 1.83 times higher if they have had judicial measures than if they have not had them. (See Table 7).

The detailed analysis of the educational situation of the young women in different protection situations is as shown in Table 8.

The educational data are worrying in this regard, as in all cases they are below the national mean (global



TABLE 6. Risk situations in female inmates as minors.

	Overall (535)		Youth protection centre (60)		Foster care (36)		Judicial measures (72)	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Percentage of young people (up to age of 25)	65	12.1	9	15	3	8.3	12	16.7
Studies below secondary level	292	54.6	33	55	25	69.4	42	58.3
Did not have work before entering prison	212	39.6	21	35	15	41.7	31	43.1
Main offence: theft	132	24.7	14	23.3	11	30.6	20	27.8
Main offence: against public health	253	47.3	36	60	17	47.2	32	44.4
Family in prison	271	50.6	37	61.7	21	58.3	45	62.5
Partner in prison	291	54.2	29	48.3	22	61.1	40	55.6
Repeat offender (not first offence)	155	29	14	23.3	12	33.3	24	33.3
Has reported domestic abuse	169	31.6	27	45	21	58.3	25	34.7

Source: Own elaboration.

TABLE 7. Relationship between judicial measures and domestic violence reports.

		Have you ever reported domestic violence?		Total
		Yes	No	
Did you have legal problems as a minor?	Yes	46	62	108
	No	121	299	420
Total		167	361	528

Source: Own elaboration.

TABLE 8. Educational level and protection and/or judicial measures.

Educational level	Whole sample		Foster care		Protection centre		Judicial measures	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No studies	39	7.2	5	13.9	10	16.7	12	16.7
Primary incomplete	83	15.4	11	30.6	10	16.7	12	16.7
Primary complete	96	17.8	7	19.4	8	13.3	9	12.5
Secondary incomplete	72	13.4	2	5.6	5	8.3	9	12.5
Secondary complete	88	16.4	2	5.6	12	20	10	13.9
Professional Training	69	12.8	5	13.9	7	11.7	8	11.1
Baccalaureate, University Orientation Course (COU)	44	8.2	3	8.3	5	8.3	8	11.1
Higher education	37	6.9	1	2.8	2	3.3	4	5.6
Others/system	10	1.8	0	0	1	1.7	0	0
Total	538		36		60		72	

Source: Own elaboration.

data); for example, 7.2% of women in the overall sample from the same research have no education, compared with 13.9% of the ones who have been in foster care, and 16.7% in residential care and judicial measures, respectively, the majority only having primary education. At the other extreme, 6.9% of the women in the overall datum have higher education compared with 2.8% of those who were in foster care, 3.3% of those who were in residential care, and 5.6% in judicial measures; these figures stand out as considerably lower—except those for women with judicial measures—than those of the overall sample. Finally, the probability of having studies lower than secondary is 69.4% for young women who had judicial or protection measures, while the percentage of women with education lower than secondary level for women without these measures is 56.6%. In other words, the probability of having a low level of education is 1.22 times greater for women who had protection or judicial measures than for those who did not have these measures.

Regarding substance addiction or problems (see Table 9), in the overall data for the sample—in which the mean age for the women who have been in residential or foster care is similar to that of those who have not—it is very apparent that the women who have been in residential or foster care have a very significant presence (60.7%) as well as a family background where problems with alcohol and/or other substances has been a constant (52.7%). If the analysis focuses on the different measures, the percentages are even higher, above 60%, especially for women who have been fostered in other families; in all cases, the consumption of alcohol and tobacco are high, over 80% with those who had judicial measures standing out most. This could, in general, result from a social situation which tolerates these substances; nonetheless, in all cases, consumption in the last thirty days of the study is low, with a change of addictive profile having occurred in their time in prison.

As for the young female inmates who have been in residential care in a youth protection centre, 86.7% have consumed

TABLE 9. Relation with substances.

	Overall		Protection centre		Fostering		Judicial measures	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Tobacco/alcohol use at some point in life	471	88%	52	86.7%	31	86.1%	65	90.3%
Tobacco/alcohol use at present	354	66.1%	39	65%	21	58.3%	47	65.3%
Drug use at some point in life	325	60.7%	38	63.3%	26	72.2%	44	61.1%
Drug use at present	59	11%	8	13.3%	5	13.9%	10	13.9%
Family member with drug/alcohol problems	282	52.7%	35	58.3%	20	55.6%	39	54.2%

Source: Own elaboration.

alcohol and/or tobacco at some stage in their life and 65% continue to do so at present. Furthermore, 63.3% have consumed other drugs at some stage in their life while at present only 13.3% continue to do so.

Among the young female inmates who were in foster care as minors, 86.1% have consumed alcohol and/or tobacco at some stage in their life and 58.3% continue to do so at present. Furthermore, 72.2% have consumed other drugs at some stage in their life while at present only 13.9% continue to do so.

Finally, with regards to the young female inmates who had some sort of judicial measure as minors, 90.3% of them have consumed alcohol and/or tobacco at some stage in their life and 65.3% continue to do so. In the case of drugs, 61.1% have used them and 13.9% continue to use them.

4. Discussion and Conclusions

While the young female prison population, aged 18-25, is considerably lower than the young male prison population (7% compared with 93%), the analysis of the impact of the protection measures and/or judicial measures in the transit to prison of the young women who passed through these situations as minors, along with the identification of the risk factors associated with the process, reveal a complex, difficult, and worrying situation.

Of these young women, 14.9% passed through one of the three scenarios considered—residential care, foster care, and/or judicial measures—and only those who passed through foster care positively value the measure. The young women who were in residential care and those who had judicial measures reject these situations, questioning their usefulness in their life and believe that they were of little or no help to them.

In any case, the low percentage of female inmates in this study with antecedents of protection measures (20.3%) and/or judicial measures (13.4%) suggests that no direct relationship can be established between experience of these measures as minors and being imprisoned as adults in the overall female prison population, or, in other words, minors with protection and/or judicial measures are only imprisoned as adults in certain circumstances.

This does not prevent us from taking into account that over half of young female inmates (55.6%) had already started on this path towards prison after being a resident in a protection centre and passing through judicial measures as minors. In this way, according to various pieces of research (Graña, Garrido, & González Cieza, 2007; Melendro, 2010), this datum differs largely from the estimated percentages of minors who have had protection measures and who have also passed through judicial measures, which is between 12% and 16%.

As for the different risk factors, the severity of most of them is confirmed, in contrast with the situation of other young inmates who did not have protection measures or, especially, judicial measures. For this latter group, the family and social setting for the most part represents a risk factor for offending, with family members in prison in over 58% of cases or the woman's partner in over 48% of cases. A statistically significant positive relationship is also found between women who had judicial problems as minors and those who have reported cases of domestic abuse, especially towards them. Family environments are perceived as negative and violent. These family and personal problems are described in the works of Novo-Corti, Barreiro-Gen, and Espada (2014) as creating the disconnect between female inmates and education, something corroborated in our work. Mapelli, Herrera, and Sordi (2013) state in their research that 51% of inmates reported being victims of abuse before entering prison; 37% said the aggressor was their spouse/partner and only 39% reported the attacker.

Regarding addictive behaviour or problems with substances, a very significant presence was observed, as well as a family environment where problems with alcohol and/or other substances has been a constant among its members. Nearly two thirds of the women who passed through protection measures and/or judicial measures have had or have connections with drugs, especially those who have been fostered in other families (72.2%). In all cases, consumption of alcohol and tobacco

is more than 80% of cases, being more frequent with women who have had judicial measures (90.3%). This situation is similar to, or even better than that of the other inmates in Spain, who have extremely high levels of reporting having consumed legal drugs (95.4%) and illegal ones (70.8%) at some stage in their life and who maintain high levels of consumption —75.3% for legal drugs and 20.6% for illegal drugs— during their time in prison (ESDIP, 2016).

On another note, the data on inmates' studies before entering prison are worrying. In general the results of young women who had protection and/or judicial measures are lower at all educational levels — most have no studies or only primary level studies, between 46% and 62% depending on the type of measure— than the results from the sample of young female inmates investigated who had not passed through this type of measures. They are significantly lower in the case of women without studies and in all levels below secondary education.

This is the case for all three measures, and especially with young people who have passed through foster care. Nonetheless, within these low levels of education, the women who had judicial measures reached higher levels, followed by those who have been in protection centres. These data contrast with those obtained in research by Añaños-Bedriñana, Llorente, and Chávez (2016) with 60 subjects aged between 18 and 27. In it they observed that a very large majority had graduated from high school or that their last year of

studies was at the secondary level. A much lower percentage of young people only had primary studies or had unfinished courses, and only one person had no education or training. A small percentage was also studying the baccalaureate, medium level vocational training (FP1) or higher level vocational training (FP2). As Gil-Cantero (2013) notes, we can hardly speak of processes of re-education and reinsertion of people who have been deprived of their liberty if they are not offered the necessary help to improve their cultural level and a level of educational with certification of their skills.

The information gathered in this work contributes new and more detailed data on risk factors, adding to research which, until now, suggested that the causes or aetiological factors for criminal activity are not clearly defined and respond to more generic situations, such as the confluence of multiple personal, family, and socio-environmental factors, the initial disadvantages of young people, their limited resources, and the absence of a welcoming social environment which offers the support needed in the case of crisis or conflict.

As several authors have noted (Mapelli, Herrera, & Sordi, 2013; Del Pozo & Añaños-Bedriñana, 2013; García-Vita & Melendro, 2013), these young prison inmates receive special treatment in their re-education and reinsertion processes, but it is still necessary to improve the intervention processes, the attention packages that meet their basic needs in a fragmented and non-comprehensive way, as well as

the functioning of the prison system itself. On these grounds, the challenge of redirecting or changing this situation is raised. Pedagogy and social education offer some answers which can be used as the foundation for going into greater depth, given the difficult situation described, based on evidence and immersion in the environments themselves, prioritising the process of intervening not only on the effect of the risk factors detected and described in this study, but also on the basis of boosting protection factors and an approach founded on good treatment and resilience which mean that the young female inmates see an increase in their possibilities of success and social inclusion.

Notes

¹ Organic Law 2/2010, of March 3, regarding Sexual and Reproductive Health and Voluntary Termination of Pregnancy; Organic Law 5/2010, of 22 June, amending Organic Law 10/1995, of November 23; Organic Law 3/2011, of January 28, amending Organic Law 5/1985, of June 19, regarding the General Electoral System; Organic Law 1/2015, of March 30, Amending Organic Law 10/1995, of November 23, regarding the Penal Code; Law 4/2015, of April 27, regarding the Status of Victims of Crime.

² Guardianship, custody, loss of parental authority are the legal measures; adoption, fostering or residential care are essentially the type of resource that can be provided.

References

- Abramovitz, M. (2017). *Regulating the Lives of Women. Social Welfare Policy from Colonial Times to the Present*. London: Routledge.
- Almeda, E. (2003). *Mujeres encarceladas*. Barcelona: Ariel
- Almeda, E. (2017). Criminologías feministas, investigación y cárceles de mujeres en España. *Papers. Revista de Sociología*, 102 (2), 151-181.

- Añaños-Bedriñana, F. (2013). Formación educativa previa ante las discriminaciones: las mujeres reclusas en España. *Revista de Educación*, 360, 91-118.
- Añaños-Bedriñana, F. (2017). Definición de los perfiles de adicción y rasgos de consumo en mujeres reclusas. In F. T. Añaños-Bedriñana (Dir.), *En prisión. Realidades e intervención socioeducativa y drogodependencias en mujeres* (pp. 37-55). Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.
- Añaños-Bedriñana, F., Llorente, L., & Chávez, M. (2016). Educación y reinserción de los jóvenes en prisión. *RES*, 22, 262-277.
- Aristizábal, L. M. (2017). *Prácticas sociales que promueven el delito y/o el desistimiento en mujeres privadas de la libertad* (Doctoral thesis). Retrieved from the legal deposit of documents of the Universitat Autònoma de Barcelona <https://ddd.uab.cat/record/187676>
- Arnosó, A. (2005). *Cárcel y trayectorias psicosociales: actores y representaciones sociales*. San Sebastián: Alberdania S.L.
- Belnap, J. (2006). The gendered nature of risk factors for delinquency. *Feminist Criminology*, 1 (1), 48-71.
- Burman, M. J., Batchelor, S. A., & Brown, J. A. (2001). Researching girls and violence. *British Journal of Criminology*, 41, 443-459.
- CGPJ (2008). *Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España*. Ciudad Real: Consejo General del Poder Judicial / Centro de Investigación en Criminología, Universidad de Castilla La Mancha.
- Chesney-Lind, M., & Pasko, L. (2013). *The female offender: girls, woman, a crime*. California: SAGE.
- Criminal Procedure Law. *Official State Gazette of Spain*, No. 260, 17 September 1882, pp. 803-806. Retrieved from [https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/(1)) (Consulted on 27/03/2019).
- Cruells, M., & Igarreda, N. (2005). *MIP: Mujeres, integración y prisión*. Barcelona: Aurea Editores.
- Del Pozo, F. J., & Añaños-Bedriñana, F. (2013). La Educación Social Penitenciaria: ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? *Revista Complutense de Educación*, 24 (1), 47-68.
- Durán, L. M. (2009). Apuntes sobre criminología feminista. *Revista Jurídica del Departamento de Derecho, Academia de Derecho Administrativo*, Tercera Época, 2 (1). Retrieved from: <http://www.derechorevistajuridica.uson.mx/revistas/articulos/1-art03.pdf> (Consulted on 02/04/2019).
- ESDIP (2016). *Encuesta sobre salud y consumo de drogas en internados en instituciones penitenciarias*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones.
- García-Vita, M. M., & Melendro, M. (2013). El ambiente en prisión: La atención recibida por las reclusas y las relaciones intramuros. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 22, 43-56.
- Gil Cantero, F. (2013). Derechos humanos y reeducación en las prisiones. El derecho a la educación en el modelo "GoodLives". *Revista de Educación*, 360, 48-68.
- Graña, J., Garrido, V., & González Cieza, L. (2007). Evaluación de las características delictivas de los menores infractores de la Comunidad de Madrid y su influencia en la planificación del tratamiento. *Psicología Clínica Legal y Forense*, 7, 7-18.
- Juliano, D. (2010a). La criminalización de las mujeres. Estigmatización de las estrategias femeninas para no delinquir. In F. T. Añaños (Coord.), *Las mujeres en las prisiones. La Educación Social en contextos de riesgo y conflicto* (pp. 25-44). Barcelona: Gedisa.
- Juliano, D. (2010b). Delito y pecado. La transgresión en femenino. In *Encarceladas*. Retrieved from http://www.feministas.org/IMG/pdf/dossier_encarceladas_5_.pdf (Consulted on 02/04/2019).

- Juvenile Criminal Law, Organic Law 8/2006 of December 4 and Organic Law 8/2012 of December 27, which modified section 4 of article 2 of the LORPM regarding territorial jurisdiction. *Official State Gazette of Spain*, No. 290, 5 December 2006, pp. 42700-42712. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/12/04/8> (Consulted on 27/03/2019).
- Law 4/2015, of April 27, on the standing of victims of crime. *Official State Gazette of Spain*, No. 101, 28 April 2015, pp. 36569-36598. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4> (Consulted on 27/03/2019).
- Mapelli, B., Herrera, M., & Sordi, B. (2013). La exclusión de las excluidas. ¿Atiende el sistema penitenciario a la necesidad de género?: una visión andaluza. *Estudios Penales y Criminológicos*, 33, 59-95.
- Martínez, P., Carabaza, R., & Hernández, A. (2008). Factores de riesgo predisponentes a la delincuencia en una población penal femenina. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 13 (2), 301-318.
- Melendro, M. (2010). *El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social*. Madrid: UNED.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministry of Health, Social Services, and Equality) (2018a). *Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a los menores infractores*. Boletín núm. 16, Datos 2016. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Observatorio de la Infancia.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministry of Health, Social Services, and Equality) (2018b). *Boletín de datos estadísticos de medidas de protección*. Boletín núm. 19, Datos 2016. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Observatorio de la Infancia.
- Novo-Corti, I., Barreiro-Gen, M., & Espada, B. (2014). Mujeres reclusas y el papel de la educación. *Revista Educativa Hekademos*, 16, 7.
- Simon, R., & Ahn-Redding, H. (2005). *The crimes women commit: the punishment they received*. Oxford: Lexington Books.
- SGIP (2011). *Población reclusa penada según grado de tratamiento*. Retrieved from: <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TE&S&am=2011&mm=6&tm=GRAD&tm2=GENE> (Consulted on 02/04/2019).
- SGIP (2018). *Estadística penitenciaria*. Agosto de 2018. Retrieved from <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/administracionPenitenciaria/estadisticas.html> (Consulted on 02/04/2019).
- Smart, C. (1995). *Law, crime and sexuality, Essays in Feminism*. London: Sage Publications Ltd.
- Smart, C. (2013). *Women, Crime and Criminology (Routledge Revivals)*. London: Routledge.
- Schulman, D. (2014). Drogas y criminalidad. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminológica*, 13. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5030250> (Consulted on 02/04/2019).
- Organic Law 10/1995 of November 23. *Official State Gazette of Spain*, No. 281, 24 November 1995, pp. 33987-34058. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10> (Consulted on 27/03/2019).
- Organic Law 1/1996 of January 15, on the Legal Protection of Minors amended by Laws 26/2015 of July 28, on the modification of the comprehensive child and adolescent protection system and Organic Law 8/2015 of July 22. *Official State Gazette of Spain*, No. 175, 23 July 2015, pp. 61871-61889. Retrieved from https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222 (Consulted on 27/03/2019).
- Organic Law 5/2000 of January 12, regulating the criminal liability of minors (Spanish acronym, LORPM). *Official State Gazette of Spain*, No. 11, 13 January 2000, pp. 1422-1441. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/12/5> (Consulted on 27/03/2019).
- Organic Law 2/2010 of March 3, on sexual and reproductive health and voluntary interruption of pregnancy. *Official State Gazette of Spain*, No. 55, 5 July 2010, pp. 21001-21014. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/03/03/2> (Consulted on 27/03/2019).

Organic Law 5/2010 of June 22, modifying Organic Law 10/1995 of November 23, of the Penal Code. *Official State Gazette of Spain, No. 152, 23 June 2010, pp. 54811-54883 97858-97921*. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/06/22/5> (Consulted on 27/03/2019).

Organic Law 3/2011 of January 28, modifying Organic Law 5/1985 of June 19, on the Spanish General Electoral System. *Official State Gazette of Spain, No. 25, 29 January 2011, pp. 9504-9523*. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/lo/2011/01/28/2> (Consulted on 27/03/2019).

Organic Law 1/2015 of March 30, modifying Organic Law 10/1995 of November 23, of the Penal Code. *Official State Gazette of Spain, No. 77, 31 March 2015, pp. 27061-27176*. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/1> (Consulted on 27/03/2019).

Tortosa, J. M. (2009). Feminización de la pobreza y perspectiva de género. *RIO, Revista Internacional de Organizaciones*, 3, 71-89.

Constitutional Court, judgments 36/1991, of 14 February, and 60/1995, of 17 March. *Official State Gazette*, 98, of 25 April, 1995, pages 7 to 15. Retrieved from <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1995-10061> (Consulted on 27/03/2019).

Authors' biographies

Fanny T. Añaños-Bedriñana has a Degree in Education and a PhD in Pedagogy. She is currently Associate Professor in the Department of Pedagogy and Deputy Director of the University Institute of Peace and Conflict Studies (IPAZ) at the Universidad de Granada. Her research, teaching, and intervention lines include social pedagogy/education, the prison environment, drug dependency and addictions, among others. She has directed various teaching innovation and research projects.

 <https://orcid.org/0000-0001-7515-1987>

Miguel Melendro has a PhD in Education. He is Associate Professor in the Department of Theory of Education and Social Pedagogy at the Universidad de Educación a Distancia, Co-Director of the UNED's TABA - International Research Group which focuses on social inclusion and human rights, Director of the Master's in socio-educational action with vulnerable groups: family, children, adolescents, and young people at UNED's Faculty of Education, guest researcher at various universities and author of over a hundred publications.

 <https://orcid.org/0000-0003-3035-9412>

Rocío Raya Miranda has a Diploma in Statistics, a Degree in Statistical Sciences and Techniques and a Doctorate in Statistics. She is currently Assistant Professor in the Department of Statistics and Operational Research of the Universidad de Granada. Her research work is on nonparametric inference, bootstrapping, and smoothing methods.

 <https://orcid.org/0000-0002-2846-1592>

Table of Contents

Sumario

Educational and civic-penal responses to antisocial behavior

Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales

Guest editor: Fernando Gil Cantero
Editor invitado: Fernando Gil Cantero

Fernando Gil Cantero

Introduction: Educational and civic-penal responses to antisocial behavior

Presentación: Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales 209

David Reyero, Fernando Gil Cantero

Education that limits is education that frees
La educación que limita es la que libera 213

María José Bernuz Beneitez, Esther Fernández Molina

The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice
La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores 229

Marina Martins, Carolina Carvalho

What do teenagers lie about?
¿En qué mienten los adolescentes? 245

Inmaculada Méndez, Cecilia Ruiz Esteban, Juan Pedro Martínez, Fuensanta Cerezo

Cyberbullying according to sociodemographic and academic characteristics among university students
Ciberacoso según características sociodemográficas y académicas en estudiantes universitarios 261

Irene Montiel, José R. Agustina

Educational challenges of emerging risks in cyberspace: foundations of an appropriate strategy for preventing online victimization
Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores 277

Maialen Garmendia Larrañaga, Estefanía Jiménez Iglesias, Nekane Larrañaga Aizpuru

Bullying and cyberbullying: victimisation, harassment, and harm. The need to intervene in the educational centre
Bullying y cyberbullying: victimización, acoso y daño. Necesidad de intervenir en el entorno escolar 295

Ana Rosser-Limiñana, Raquel Suriá-Martínez

School adaptation and behavioural and emotional problems in minors exposed to gender violence
Adaptación escolar y problemas comportamentales y emocionales en menores expuestos a violencia de género 313

Fanny T. Añaños-Bedriñana, Miguel Melendro

Estefanía, Rocío Raya Miranda
Young women with protective and judicial measures and their transit towards prison
Mujeres jóvenes con medidas de protección y judiciales y sus tránsitos hacia la prisión 333

Book reviews

Esteban Bara, F. Ética del profesorado [*Ethics of teaching staff*] (Juan García Gutiérrez). **García Amilburu, M., Bernal, A., & González Martín, M. R.** *Antropología de la educación. La especie educable* [*Anthropology of education. The educatable species*] (Yaiza Sánchez Pérez). **Rose, D., & Martin, J. R.** *Leer para aprender. Lectura y escritura en las áreas del currículo* [*Learning to write/reading to learn: Genre knowledge and pedagogy in the Sydney School: scaffolding democracy in Literacy Classrooms*] (Francisco Lorenzo Bergillos). **Buxarrais, M. R., & Vilafranca, I. (Coords.)**. *Una mirada femenina de la educación moral* [*A feminine view of moral education*] (Eric Ortega González). 351

This is the English version of the research articles and book reviews published originally in the Spanish printed version of issue 273 of the **revista española de pedagogía**. The full Spanish version of this issue can also be found on the journal's website <http://revistadepedagogia.org>.



ISSN: 0034-9461 (Print), 2174-0909 (Online)

<https://revistadepedagogia.org/>

Depósito legal: M. 6.020 - 1958

INDUSTRIA GRÁFICA ANZOS, S.L. Fuenlabrada - Madrid